Grandes empresas y universidades critican la medida - El País - 06/09/2017

Grandes empresas y universidades critican la medida

El Congreso tiene un plazo de seis meses para acordar la salida de 800.000 jóvenes

AMANDA MARS, **Washington**

La confirmación del punto final al programa que Barack Obama impulsó para proteger de la deportación a los inmigrantes que entraron en EE UU siendo niños desató ayer la esperada oleada de críticas entre importantes empresas tecnológicas, como Facebook, instituciones como Harvard e incluso por parte de varios legisladores republicanos. La medida implica que unos 800.000 *dreamers* (en español, soñadores) pierden una dispensa temporal por la que, pese a su limbo legal, podían residir y trabajar durante dos años (renovables) en EE UU, el país donde se han criado.

"Este es un día triste para nuestro país. La decisión de terminar con el DACA [las siglas en inglés de este programa] no solo está mal. Resulta especialmente cruel ofrecer a los jóvenes el sueño americano, animarles a salir de las sombras y confiar en nuestro Gobierno y entonces castigarles por eso", escribió el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg.

El plan de Obama, que salió adelante en 2012 como una orden ejecutiva, quedaba lejos de la barra libre: los candidatos a beneficiarse debían haber entrado en el país con menos de 16 años y llevar residiendo en él desde al menos 2007. Se trata de un colectivo que, en muchos casos, ni siquiera tuvo conciencia de su situación irregular hasta hacerse mayor, apenas conoce su país de origen y se siente como un estadounidense más. Ahora han perdido la protección y, además, figuran en una lista en manos del Gobierno.

El anuncio provocó la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio Hispana de EE UU, Javier Palomarez, de un panel de expertos que bajo el nombre de Coalición de Diversidad asesora al presidente. "Si se deshace del DACA, está demostrando que es un mentiroso", había avanzado Palomarez en una entrevista en CNN hace unos días. La presidenta de Harvard envió ayer una carta dura a los miembros de la institución en la que tachaba de "cruel" la política anunciada por el Departamento de Justicia y prometió batallar contra ella.

Trump está, *de facto*, dejando el futuro de estos jóvenes en manos del Congreso, que tiene un plazo de seis meses para acordar una salida a 800.000 personas, menos del 10% de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula hay en EE UU. "Nosotros, como estadounidenses, no responsabilizamos legalmente a los niños de las acciones de sus padres", dijo el lunes en un comunicado el republicano James Lankford, senador por Oklahoma. "No creo que deba hacer eso", dijo el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan.

El viernes, una carta firmada por 400 ejecutivos advertía de que la supresión del programa podría suponer la pérdida de 460.300 millones de dólares en el PIB y 24.600 millones en los sistemas de Seguridad Social y cobertura sanitaria. Entre los firmantes figuraban Zuckerberg, Meg Whitman, de Hewlett-Packard o Mary Barra, de General Motors.